



(1) Capeto y<sup>o</sup> 7  
24 Dec -

7  
12

## LA REPUBLICA Y LA IGLESIA

La Constitución de la República proclama la libertad de conciencia y la de cultos. La Ley de Congregaciones y confesiones regula su ejercicio y lo ampara.

La situación de hecho de la Iglesia, a partir de Julio pasado, en todo el territorio leal, excepto el vasco, es la siguiente:

- a) Todos los altares, imágenes y objetos de culto, salvo muy contadas excepciones, han sido destruidos, los más con vilipendio.
- b) Todas las iglesias, se han cerrado al culto, el cual ha quedado total y absolutamente suspendido.
- c) Una gran parte de los templos, en Cataluña con carácter de normalidad, se incendiaron.
- d) Los parques y organismos oficiales recibieron campanas, cálices, custodias, candelabros y otros objetos de culto, los han fundido y han aprovechado para la guerra o para fines industriales sus materiales.
- e) En las Iglesias han sido instalados depósitos de todas clases, mercados, garages, cuadras, cuarteles, refugios y otros modos de ocupación diversos, llevando a cabo los organismos oficiales que los han ocupado en su edificación obras de carácter permanente, instalaciones de aguas, cubiertas de azulejos para suelos y mostradores, puertas, ventanas, básculas, firmes especiales para rodaje, rótulos insertos por obras de fábrica y otras actividades.
- f) Todos los conventos han sido desalojados y suspendida la vida religiosa en los mismos. Sus edificios, objetos de culto y bienes de todas clases fueron incendiados, saqueados, ocupados o derruidos.
- g) Sacerdotes y religiosos han sido detenidos, sometidos a prisión y fusilados sin formación de causa por miles, hechos que, si bien amenguados, continúan aún, no tan solo en la población rural, donde se les ha dado caza y muerte de modo salvaje, sino en las poblaciones. Madrid, Barcelona y la restantes grandes ciudades, suman por cientos los presos en sus cárceles sin otra causa conocida que su carácter de sacerdote o Religioso.



MINISTRO DE LA REPÚBLICA

h) Se ha llegado a la prohibición absoluta de retención privada de imágenes y objetos de culto. La policía que practica registros domiciliarios, buceando en el interior de las habitaciones, de vida íntima personal o familiar, destruye con escarnio y violencia imágenes, estampas, libros religiosos y cuanto con el culto se relacione o lo recuerde.

Como causa inmediata de ese movimiento popular cuyo desbordamiento se acusa de modo tan violento, se sienta la de que, allí donde la Iglesia cumplió su misión evangélica, sin caracterizar sus organismos un movimiento político determinado, contando la República y la democracia sus adeptos en organizaciones de espíritu cristiano, como sucede en Euzkadi, nadie atentó contra los templos, sacerdotes o religiosos, ni dificultó sus cultos, hoy respetados y amparados por el pueblo y el Gobierno del país. Por el contrario, los ataques anotados se dieron en el resto del territorio leal, donde no podría hacerse con generalidad al menos, la misma afirmación de conducta sentada en tierra vasca.

No tan solo el imperativo de las leyes, sino la conveniencia de la República, vista singularmente al través del Ministerio de Estado, de las Embajadas de París y Londres y del organismo ginebrino, obligan al estudio del problema y fuerzan a su resolución. La opinión del mundo civilizado observa con extrañeza que conduce a la repulsión, la conducta del Gobierno de la República que no ha impedido los acusados actos de violencia y que consiente en que continúen en la forma y términos que expuestos quedan. La ola revolucionaria pudo estimarse ciega arrolladora e incontrolada en los primeros momentos. La sistemática destrucción de templos, altares y objetos de culto ya no es obra incontrolada. Más la participación de organismos oficiales en la transformación de los templos y objetos de culto para fines industriales, la prisión confinada en las cárceles del Estado de sacerdotes y religiosos, sus fusilamientos, la continuidad del sistema verdaderamente fascista por el que se ultraja a diario la conciencia individual de los creyentes en la misma intimidad del hogar por fuerzas oficiales del Poder Público, todo ello deja de tener explicación posible, para situar al Gobierno de la República ante el dilema de su complicidad o de su impotencia, ninguna de cuyas conclusiones conviene a la política exterior de la República y a la estimación de su causa ante el mundo civilizado.

En atención a lo cual interesa la adaptación por el Consejo de Ministros de los acuerdos siguientes:

1.<sup>o</sup>.- La libertad de todos los sacerdotes, religiosos o afectos a congregación u obra religiosa determinada, contra los cuales no existan otros cargos.

2.<sup>o</sup>.- El cumplimiento de la Ley de Congregaciones y Confesiones



y en tal sentido, que por el Sr. Ministro de Justicia se confeccione una relación de los templos y edificios religiosos existentes, su estado actual, objeto al que están destinados, vicisitudes por las que hayan pasado e instrumentos de culto que contengan.

3<sup>a</sup>.- Que en adelante no sea ocupado ninguno de ellos para fines diversos del culto al que originariamente vinieron destinados, sin Orden Ministerial de la que se dé cuenta al Consejo de Ministros y que se publique en la Gaceta, con excepción de las ocupaciones que hagan precisas las medidas militares.

4<sup>a</sup>.- Que todas las obras de fábrica que de modo permanente se efectuen en los templos, hayan de merecer la aprobación de la Dirección de Bellas Artes.

5<sup>a</sup>.- La declaración expresa de la licitud de la práctica de todos los cultos religiosos, siempre que sus manifestaciones externas se atemperen a las leyes.

6<sup>a</sup>.- La prohibición de toda orden de policía que tienda a dificultar en el interior del hogar el ejercicio de los derechos individuales y las prácticas de culto, siempre que con ellas no se falte a la Ley.

El Consejo no obstante acordará lo procedente.

Barcelona para Valencia a siete de Enero de mil novecientos treinta y siete.



Barcelona 12 Enero 1937

En Consejo de 9 del corriente se da cuenta.- Se oponen los Sres. Largo Caballero, García Oliver y Galarza.- El Sr. Álvarez del Vayo manifiesta su conformidad en principio, pero cree que la posición del Sto. Padre entregado al fascismo, lo impide.- En cambio ha de notarse el apoyo recibido por la República de los católicos vascos.- El Presidente observa de que en Euzkadi había dificultades, las hay ya, por el excesivo respeto que allí se tiene a la Iglesia.- Es opuesto a que dé mi conferencia en París y a que se salga de España, como no sea por motivos oficiales.- García Oliver se manifiesta enemigo de la religión católica.- Galarza acusa la existencia de inmoralidades en los conventos.- Largo Caballero habla extensamente.- Los republicanos callan elocuentemente.- La propuesta es rechazada en su integridad, sin que tenga más voto que el mío.